

GUIA DE LA PRESENTACION DE LA
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY (FCPU)
EN LA
COMISION ESPECIAL PARA EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY POR
EL QUE SE CREA EL SISTEMA PREVISIONAL COMUN
DE LA
CAMARA DE SENADORES

PRIMER CAPITULO:

LAS COOPERATIVAS SON DE INTERES GENERAL E INSTRUMENTOS
FORTALECEDORES DE LA DEMOCRACIA

Antes que nada, queremos recordar que el régimen jurídico de las cooperativas está contenido, hoy en día, en la **Ley General de Cooperativas N° 18.407, la cual fue aprobada en 2008 por unanimidad en ambas Cámaras**, a partir de un Ante Proyecto que presentó el movimiento cooperativo.

Y también es pertinente recordar que **en el art. 2 de la ley se estableció una Declaración de interés en estos términos:**

“Declárase a las cooperativas de interés general e instrumentos eficaces para contribuir al desarrollo económico y social, al fortalecimiento de la democracia y a una más justa distribución de la riqueza.

El Estado garantizará y promoverá la constitución, el libre desarrollo, el fortalecimiento y la autonomía de las cooperativas, en todas sus expresiones económicas y sociales.”

Pero más allá de esa disposición, el Estado uruguayo desde mucho antes ha reconocido la importancia de las cooperativas y ha instrumentado diversas formas y políticas para apoyar su desarrollo.

Por otro lado, todos conocemos que nuestro Estado, históricamente, ha sido muy cuidadoso en la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT. Y acá estamos refiriendo a la **Recomendación de la OIT sobre cooperativas 193-2002** y la **Recomendación 204-205 sobre Transición de la Economía Informal a la Economía formal.**

En particular la **Recomendación 193-2002** ha sido un instrumento fundamental para un mejor desarrollo de las cooperativas, y en tal sentido es de recordar que allí se establece que:

Los Estados deben alentar el desarrollo y el fortalecimiento de la identidad de las cooperativas basándose en:

- los **VALORES COOPERATIVOS** de autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y una ética fundada en la honestidad, transparencia, responsabilidad social e interés por los demás, y en
- los **PRINCIPIOS COOPERATIVOS** elaborados por el movimiento cooperativo internacional: 1) adhesión voluntaria y abierta; 2) gestión democrática por parte de los socios; 3) participación económica de los socios; 4) autonomía e independencia; 5) educación, formación e información; 6) cooperación entre cooperativas, e 7) interés por la comunidad.

En cuanto al **MARCO POLITICO Y PAPEL DE LOS GOBIERNOS la Recomendación 193** establece que:

“Una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo, mutualista y otras organizaciones sociales y no gubernamentales. Dentro de este contexto, los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorables a las cooperativas y compatibles con su naturaleza y función, e inspirados en los valores y principios cooperativos.”

“Los gobiernos deberían promover el importante papel que las cooperativas desempeñan en la transformación de lo que a menudo son actividades

marginales de supervivencia (a veces designadas como "economía informal") en un trabajo amparado por la legislación y plenamente integrado en la corriente principal de la vida económica."

En cuanto a la aplicación de las POLÍTICAS PUBLICAS de promoción de las cooperativas la Recomendación dice:

"Los Estados Miembros deberían adoptar una legislación y una reglamentación específicas en materia de cooperativas, inspiradas en los valores y principios cooperativos enunciados."

"Los gobiernos deberían consultar a las organizaciones cooperativas, así como a las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, para la formulación y revisión de la legislación, las políticas y la reglamentación aplicables a las cooperativas."

Corresponde informar que el Estado uruguayo ha cumplido y viene cumpliendo con los elementos que surgen de la Recomendación 193.

El ejemplo más claro de ello es la creación en la ley vigente -por unanimidad como ya dijimos- del INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO (INACOOP) como persona pública no estatal con la finalidad de proponer y llevar a cabo políticas públicas de promoción del cooperativismo en general, con una dirección mixta (Poder Ejecutivo y representantes del cooperativismo) y una financiación también compartida (fondos presupuestales públicos y recaudación de un impuesto que pagan las cooperativas).

Así pues, la promoción y el fomento del cooperativismo han encontrado una institucionalidad estatal central, lo cual no impide que otros organismos públicos (ministerios, intendencias, etc.) puedan también, dentro de sus políticas específicas, establecer mecanismos de impulso al cooperativismo y a la economía social en general.

Y también es de mencionar el control estatal de las cooperativas que se ejerce por medio de la AUDITORIA INTERNA DE LA NACIÓN, en cuanto a su funcionamiento genuino y apegado a la legalidad. Sin perjuicio de que el MIDES es quien se encarga del control de las "cooperativas sociales" y el MVOT de las

“cooperativas de vivienda” dadas las particularidades de estas cooperativas, es importante destacar que la centralización en esta materia también ha sido muy importante, en aras a la especialización y a la eficiencia en materia de controles.

LA FCPU Y LAS COOPERATIVAS

La FCPU es una entidad creada en 1962 que reúne y representa, desde aquella época, a las cooperativas de producción, hoy en día denominadas cooperativas de trabajo. También deben destacarse que la Ley N° 18.407 también incluye dentro de las cooperativas de trabajadores a las cooperativas sociales y a las cooperativas de artistas y oficios conexos.

El rol de la Federación ha sido desde siempre el de apoyar la expansión del cooperativismo de trabajo, en sus diversas variantes; llevar adelante acciones en relación con la educación y formación en materia de valores y principio y de gestión de empresas cooperativas; y también es parte de su objeto social el de representar a las cooperativas de trabajo afiliadas y transmitir sus puntos de vista en los diversos ámbitos institucionales del país, públicos y privados.

Una de las cuestiones fundamentales que conlleva el apoyo a la creación y al mantenimiento de las cooperativas de trabajo, es lo relativo a **evitar la precarización del trabajo**, y más bien por el contrario accionar siempre en el sentido de **lograr el trabajo digno**.

La Federación es integrante de la “Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas” (CUDECOOP) desde la fundación de esta, y debe destacarse que en todo lo que ha sido posible, desde lo que se realiza en Uruguay, se ha tratado de apoyar el desarrollo de las cooperativas en otros países. En los últimos 5 años ha ejercido la Presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional -Sección Américas- la Dra. Graciela Fernández (representante de nuestro país), y también hemos transmitido nuestras experiencias, así como recogido las de otros países, desde la Vicepresidencia de CICOPA-Américas (Organización Sectorial Regional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios de Cooperativas de las América), que actualmente ocupa la Federación.

La Federación en los últimos tiempos ha desarrollado sus actividades en base a tres EJES DE TRABAJO:

- ✓ **Desarrollo territorial**
- ✓ **Desarrollo cooperativo**
- ✓ **Equidad y género**

En relación con el **eje EQUIDAD Y GENERO** ha llevado adelante en los últimos años el Programa de Cooperación con Equidad, con la finalidad de que las mujeres cooperativistas sean parte activa del movimiento en términos formales, tanto en los lugares de decisión y gestión de las empresas cooperativas como a nivel institucional promoviendo acciones que aporten a derribar brechas de género, generando espacios de participación y acción real para tal fin. Este Programa se viene desarrollando actualmente en conjunto con la CUDECOOP.

Es de señalar también que **las cooperativas de trabajo son empresas en las cuales se practica la autogestión**, o sea, los trabajadores, además de llevar a cabo las tareas específicas de la producción de determinados bienes o servicios, y de comercializar esos bienes o servicios en el mercado, administran a la cooperativa, gestionan la cooperativa, o sea, llevan a cabo integralmente, por su cuenta, las actividades para su funcionamiento pleno, asumiendo así los riesgos típicos de cualquier empresario.

También es sabido que el funcionamiento de las cooperativas se inserta en las características generales del cooperativismo, en el sentido de que son asociaciones voluntarias de personas que se unen para, por medio del esfuerzo propio y la ayuda mutua, satisfacer una necesidad (en este caso la de obtener un puesto de trabajo) por medio de una empresa democráticamente gestionada. Y basan su accionar en los valores y **principios cooperativos**, siendo estas últimas reglas universales que se han mantenido desde las primeras cooperativas que aparecen en Inglaterra en el marco de la Revolución Industrial. Nos estamos refiriendo a los principios de libre ingreso, de democracia (una persona un voto), de equidad en la participación económica, de autonomía e independencia, de inter cooperación, de educación e información, y de compromiso con la comunidad y con el medio ambiente. **En el caso**

de Uruguay se trata de verdaderos principios jurídicos, por cuanto han sido recogidos en el art. 7 de la Ley General de Cooperativas N° 18.407.

LAS COOPERATIVAS Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA HISTORIA

La historia indica que hubo algunas cooperativas de producción por comienzos del siglo XX, pero más bien mezcladas con los fines y objetivos de otras clases de organizaciones, como las sociedades de socorros mutuos (o mutuales) y las sociedades de resistencia, entidades estas últimas que constituyeron, más adelante, los primeros sindicatos de trabajadores. Así, se podrían calificar como de trabajo cooperativo a las sociedades cooperativas de mucamos y cocineros, la de peluqueros y barberos y la de tipógrafos.

Las cooperativas de trabajo en particular fueron reguladas por primera vez en el país en el año 1946, por medio de la ley de cooperativas de producción y consumo N° 10.761, y es a partir de ese momento cuando se nota en el país un desarrollo mayor de las cooperativas de trabajo.

Las leyes además de regular el funcionamiento de estas cooperativas, también establecieron algunas formas o políticas de promoción e impulso, y así se llegó a la situación actual en la cual las cooperativas no tienen restricciones legales y operan en diversas áreas de la economía nacional. Después de aquella ley primigenia se aprobaron las leyes N° 13.481, en el año 1966, y la ley N° 17.794 en el año 2004, dentro de los parámetros antes mencionados. Y finalmente, como ya adelantamos, tenemos la Ley General de Cooperativas N° 18.407, vigente hoy en día.

Por cierto que las cooperativas de trabajo son una herramientas utilizadas en distintas clases de actividades por iniciativa de la gente, pero a través de la historia se puede comprobar que las cooperativas de trabajo han tenido distintas épocas si se las mira en relación con las causas de su creación, y es conocido que ha sido en más de una oportunidad una forma de enfrentar las crisis económicas. En estas épocas se aprecia

claramente el accionar de **los trabajadores de muchas empresas quebradas que, con gran esfuerzo y variada suerte, y con la finalidad de mantener sus puestos de trabajo, conforman cooperativas de trabajo a través de las cuales recuperan a aquellas empresas clásicas.** Y repetimos esto ha sido con variada suerte, pero no se puede desconocer lo importante que eso ha sido para el país en momentos complejos. También está comprobado que las cooperativas de trabajo en momentos difíciles, tales como fue, por ejemplo, recientemente, la pandemia. En efecto, cuando se compara la situación en los momentos más difíciles de la pandemia el mantenimiento del empleo (usado este concepto en términos amplios de ocupación), se aprecia que el desempleo fue menor en las cooperativas de trabajo que en el resto de las empresas.

Como ya se mencionó, también son cooperativas de trabajo las **“COOPERATIVAS SOCIALES”, que han sido y siguen siendo** un instrumento de inclusión social en el marco de las políticas sociales aplicadas en el país.

Y en la Ley 18.407 se agregó como otro sub tipo de cooperativas de trabajo a las de **“ARTISTAS Y OFICIOS CONEXOS”**, con la finalidad de contemplar a un sector que justamente tenía algunas dificultades con los aspectos relativos a la seguridad social.

SEGUNDO CAPITULO:

LOS NUMEROS DEL COOPERATIVISMO EN GENERAL Y DEL COOPERATIVISMO DE TRABAJO EN PARTICULAR

El cooperativismo ha tenido en los últimos años un importante crecimiento, en casi todas sus ramas. Daremos seguidamente las cifras principales, estando al informe de mayo 2022, con información al año 2021, elaborado por Amalia Astiazaran (Inacoop) y Alejandro Castiglia (MTSS), que se encuentra en la web de INACOOOP.

Existen en todo el país un total de 3740 cooperativas. A su vez, las cooperativas y sociedades de fomento rural en el país ocupan a un total de 25.148 personas (puestos de trabajo), siendo las cooperativas de trabajo las que generan más empleo, con el 36,9% de los trabajadores (9.270 personas empleadas).

Del total de cooperativas, 943 son cooperativas de trabajo, 335 cooperativas sociales y 7 cooperativas de artistas y oficios conexos.

Según el Informe mencionado, **las COOPERATIVAS DE TRABAJO registran un total de 9.270 puestos de trabajo.** En cuanto a la distribución por sexo los números indican que el 49,4% de los ocupados son varones, y el 50,6% son mujeres.

En cuanto a la edad, el tramo de entre 30 y 39 años concentra al 29% de los trabajadores. Le sigue el tramo con edades comprendidas entre los 40 y 49 años, con el 26,2%, y el tramo de entre 50 y 59 años con el 22,6% de los ocupados.

En cuanto al empleo generado por rama de actividad, sin perjuicio de que hay cooperativas de trabajo en 16 ramas o sectores diferentes de la economía nacional, hay 3 actividades que concentran el 55,4% de las cooperativas que presentan personas ocupadas, y al 67,8% del empleo generado (6.282 ocupados). Estas actividades son:

- ✓ El transporte con el 17,4% de las cooperativas de trabajo y el 28,7% de los ocupados (2.659 empleos).
- ✓ La enseñanza con el 19,9% de las cooperativas de trabajo y el 23,5% de los ocupados (2.180 empleos).
- ✓ Las actividades sociales y relacionadas con la salud humana con el 18,1% de las cooperativas de trabajo y el 15,6% de los ocupados (1.443 empleos).

En relación con las COOPERATIVAS SOCIALES generan un total de 3.895 puestos de trabajo; de los cuales el 57,4% son mujeres y 42,6% son varones.

Y en cuanto a la distribución por edad tenemos que: los tramos con mayor cantidad de ocupados comprenden a las personas de entre 30 y 39 años y entre 40 y 49 años, quienes representan a poco más de la mitad de los ocupados (25,6% cada una de las categorías). Por su parte, los menores de 30 años representan a casi 3 de cada 10 ocupados (12,8% son menores de 25 años y 15,2% tienen entre 25 y 29 años). En el otro extremo, los ocupados entre 50 y 59 años agrupan al 15,9% de los trabajadores y los de 60 años o más al 4,8%. Considerando al total de ocupados, el promedio de edad es de 39 años.

En relación con las COOPERATIVAS DE ARTISTAS Y OFICIOS CONEXOS al años 2021 se registran 1.874 personas con actividad. Con la particularidad de que el aporte a la seguridad social refiere a los períodos efectivos de actividad de sus integrantes, por lo que el aporte no es permanente.

En cuanto a la distribución por sexo, el 57,5% de los ocupados son varones, mientras que el 42,5% son mujeres.

Y en relación con los tramos de edad es muy significativa la proporción de personas jóvenes: el 28,3% de los ocupados tiene entre 18 y 29 años. Entre los 30 y 39 años se ubica el 30% de los ocupados, siendo este tramo el más importante en cantidad de integrantes (563 personas). En el otro extremo, los mayores de 50 años suman el 18,6% del total (348 personas). Para el año 2020 la distribución para esos tramos de edad era similar a la del presente año: 28,7%, 31,4%, 17,5%, respectivamente.

Asimismo, un trabajo muy reciente realizado por la Cooperativa Comuna en el marco de un acuerdo entre el INACOOOP y la FCPU, nos da información acerca del mantenimiento del trabajo en las cooperativas de trabajo y en las cooperativas sociales, pero que no detallamos para no alargar esta presentación.

TERCER CAPITULO:

LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Ahora bien, en relación con la seguridad social es pertinente citar en primer lugar que desde la ley 13.481 del año 1966 la situación de las cooperativas de trabajo es clara: se insertan en el régimen general de previsión social. No hay duda de que fue muy acertada la decisión del legislador de aquella época, definiendo para las cooperativas de trabajo -para despejar algunas dudas que por aquel momento aún existían- de que:

“Se reputarán aplicables a todos los trabajadores que presten servicios en las cooperativas, cualquier sea su calidad, las normas de protección de la legislación laboral y de previsión social”.

Esta norma se ha mantenido en las leyes siguientes. Tanto en la ley 17.794 que tuvo corta duración (desde 2004 hasta 2008) como en la Ley General de Cooperativas 18.407 de 2008 se mantuvo esta disposición.

Esta definición, por un lado, diferencia al país positivamente de otras legislaciones en las cuales la situación de la seguridad social de las cooperativas de trabajo es aún compleja, y, por otro lado, favorece la creación y la expansión de las cooperativas de trabajo en nuestro país. **De algún modo se reconoce que el socio cooperativista de trabajo es un trabajador más; con la diferencia de que no se trata, estrictamente, de un trabajador asalariado, pero que en esencia está sometido a vicisitudes muy similares que el conjunto de los trabajadores.**

Contar con un régimen de previsión social claro y con instrumentos de apoyo para momentos complicados durante la vida activa del trabajador (tal como es, por ejemplo, el acceso al seguro de desempleo) genera mucha estabilidad para el desarrollo del cooperativismo de trabajo. Y es por demás evidente que es vital para cada uno de los trabajadores el hecho de acceder individualmente a una jubilación al momento de su retiro.

Y lo antedicho se refuerza si tenemos en cuenta que las cooperativas de trabajo enfrentan algunas debilidades muy trascendentes. Por solo citar una de las más importantes, traemos a colación la relacionada con la necesidad de capital: los trabajadores no tienen capital propio, por lo cual, el acceso al capital es una de las dificultades que suelen enfrentar las cooperativas, sea capital de riesgo o capital de giro. Este es un aspecto que ciertamente el Estado ha tratado de solucionar de diferentes formas, según la época. Por ejemplo, la ley 10.761 de 1946 establecía que: *“El Banco de la República podrá otorgarles créditos en forma de préstamos, descuentos o redescuentos con un interés no mayor del 4% anual.”* Y, hoy en día, es de destacar, entre otros instrumentos, la existencia del FONDES desde 2010, regulado más adelante, en 2015, por la ley 19.337 de 2015, el cual tiene la finalidad de apoyar a los emprendimientos autogestionarios y a las pequeñas y medianas empresas en general.

Ahora bien, volviendo al tema de la seguridad social ya quedó dicho claramente lo relevante que es para las cooperativas de trabajo estar incorporadas al régimen

general, y también destacamos la similitud de los socios cooperativistas con los trabajadores en general.

Entonces: el Proyecto de Ley referido al “Sistema Previsional Común” lo consideramos de gran relevancia económica y social, y, por ello, nos pareció pertinente pedir esta audiencia para dar nuestro punto de vista al respecto. Porque además somos conscientes, al igual que todos los demás actores, de la necesidad de llevar adelante una reforma por las características más que nada demográficas y etarias de nuestra población.

Reconocemos que no somos expertos en la materia, y por más que damos nuestro humilde punto de vista, no dejamos de señalar que debemos aún estudiar más y, sobre todo -por ser esta temática social de gran complejidad- contar con mayor asesoramiento, siendo este uno de los planteos que haremos al final con carácter general.

Conocemos, en líneas generales, el camino recorrido: la conformación de una Comisión de Expertos de Seguridad Social con participación amplia, y el trabajo realizado por esta, como insumo previo al Proyecto de Ley. **Precisamente, a poco que se anunció la entrega del Informe en la Federación realizamos una actividad para escuchar las explicaciones y los puntos de vista de dos integrantes de esa Comisión, el Doctor Alvaro Forteza y el Economista Hugo Bai. Los expositores muy amablemente nos transmitieron los aspectos esenciales de la posible reforma, siendo una actividad que nos ayudó mucho, y que también nos fortaleció en la idea de que, siendo una cuestión de extrema relevancia para nuestra generación y para futuras generaciones, sería altamente conveniente lograr un amplio consenso, tal como lo destacaron también los expositores; es decir, una reforma que con el insumo de los expertos y de las diversas entidades representativas del espectro socio-económico nacional, pueda contar asimismo con el consenso del conjunto del sistema político.**

EN CUANTO AL PROYECTO DE LEY CONCRETAMENTE

(Acuerdo en el régimen previsional común)

Destacamos sin duda del Proyecto el planteo de ir hacia un sistema previsional común o general. En otros tiempos económicos y sociales del país, la seguridad social se fue divergiendo en diversos colectivos, lo cual fue así dando solución a esos colectivos y a la casi totalidad de la población, y si bien eso se justificó en sus momentos, consideramos que la realidad desde hace varios años lleva a pensar que debemos apuntar a la solidaridad no solo intergeneracional sino también a la solidaridad inter-sectorial.

(Acuerdo con los principios del sistema)

Coincidimos con los principios en los que se plantea el sustento del sistema, los recogidos en el art. 2 del Proyecto de Ley (**universalidad, igualdad, adecuación, sustentabilidad y solidaridad social**).

(Acuerdo en que haya un plazo razonable para la vigencia del nuevo régimen)

También nos parece adecuado establecer un plazo razonable para la entrada en vigencia del nuevo régimen, como así también el establecimiento de un esquema de convergencia de ambos regímenes, especialmente porque de esa forma las personas más próximas a su retiro se les podrá cumplir sus expectativas, las cuales seguramente se verían resentidas si el cambio fuera inmediato.

(ASPECTOS SOBRE LOS QUE SE EXPRESARAN DESACUERDOS O DUDAS)

Ahora bien, consideramos que debemos expresar algunos desacuerdos o más bien algunas dudas que tenemos sobre el Proyecto de Ley:

(CONTINUIDAD DEL REGIMEN MIXTO) El Proyecto de alguna manera profundiza la existencia del régimen mixto, es decir, mantenimiento de un pilar de solidaridad intergeneracional y un pilar de ahorro individual. Decimos esto por cuanto ahora no habrá un mínimo a partir del cual se harán aportes a las AFAPs sino que un porcentaje de la totalidad de los sueldos de los trabajadores irán a ser administrados por las AFAPs.

Y sobre este punto desearíamos contar con mayor información y análisis. Es un tema complejo, pero tenemos algunas dudas. Al día de hoy ya llevamos 25 años del régimen mixto aprobado por la ley 16.713 del año 1995 y las rentas vitalicias que se sirven son muy bajas. **Tenemos entendido que promediamente ascienden a algo más de \$ 7.000 el promedio, habiendo, por ende, miles de esas prestaciones que se ubican por debajo de ese guarismo.**

Esta temática merecería, a nuestro juicio, un esclarecimiento mayor a todos los colectivos sociales.

(NO HAY UN TRATAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL)

Como han destacado algunos técnicos la reforma solamente aborda la temática de jubilaciones y pensiones, y sin restar para nada importancia a esta parte de la seguridad social, tenemos dudas; es decir, **no hemos encontrado mayores explicaciones de por qué no se aborda el sistema previsional en su conjunto.**

Nos referimos a todo el conjunto de las prestaciones (asignaciones familiares, seguros de paro, sistema de cuidados, etc.), como así también lo relativo a los ingresos al sistema. Por ejemplo, hemos sentido a algún legislador, opinar acerca de que la pérdida de puestos de trabajo por la tecnología podría requerir el análisis de si no debería haber algún aporte por estos nuevos elementos tecnológicos.

(LA REDUCCION DE LOS GASTOS DEL ESTADO QUE PROVOCARÍA LA REFORMA Y SU REDISTRIBUCION)

Hemos sentido anuncios en el sentido de que la Reforma Jubilatoria podría producir una reducción importante de los gastos del Estado en relación con el Producto Interno Bruto (PIB); y esto lo asociamos con lo dicho anteriormente, **en el sentido de que un tratamiento integral del sistema de protección social podría llevar a determinar, con mayor consenso social, la forma y los destinos de redistribuir esos ingresos.** Por ejemplo, el dato de que el porcentaje más alto de pobreza se ubica en los niños (infantilización de la pobreza) debería implicar el análisis y eventualmente los mecanismos que debiera contener el sistema de seguridad social para paliar esa situación, como también nos preocupa el futuro del sistema de cuidados.

(REDUCCION DE LOS MONTOS JUBILATORIOS) Lo anterior está muy relacionado con otro punto muy relevante y muy sensible, el de los montos jubilatorios. En este sentido nos preocupa el hecho de que, según algunos estudios que se han dado a conocer, se exigirán más años de trabajo (por cuanto, se eleva la edad mínima para jubilarse a 65 años), y por lo tanto, **serán mayores los aportes que realizarán las personas, pero, al mismo tiempo en muchos casos los montos jubilatorios que se percibirán serán menores.**

Otro aspecto que seguramente afectará los montos jubilatorios será la elevación de los años a considerar para el promedio sobre el cual **se calculará el monto jubilatorio, pasando de 20 años, como es actualmente, al promedio de los mejores 25 años de trabajo.**

(SITUACION ACERCA DE COMPATIBILIZAR LAS JUBILACIONES CON EL TRABAJO REMUNERADO) No estamos en desacuerdo con la compatibilización de la jubilación y, a la vez, la posibilidad de que las personas desarrollen un trabajo remunerado. Pero esto lo vinculamos con el hecho de que, si las jubilaciones fueran menores, la necesidad de trabajar sería seguramente mayor, y esto posiblemente afectará a los más jóvenes por ser el sector donde se da el porcentaje más alto de desempleo. **Se debería analizar alguna disposición tuitiva del trabajo de los más jóvenes.**

(SITUACION EN EL DENOMINADO PILAR CERO O RENTA BASICA MINIMA) **Consideramos muy relevantes los mecanismos que fortalezcan -que aseguren- a aquellas personas que lo necesitan una renta básica mínima,** como así también con los suplementos que puedan incorporarse en los regímenes no contributivos, por cuanto nadie desconoce que la informalidad existe en varios sectores, como así también que la intermitencia de aportes en un porcentaje alto de personas, implica que no alcancen los 30 años de aportes. Y sabemos que estas personas son las que durante su vida pasan las mayores necesidades al estar por fuera del esquema social de protección y suelen llegar con mayores vulnerabilidades a la etapa final de su vida.

CAPITULO CUARTO

COMENTARIO FINAL

Para cerrar nuestra intervención queremos expresar nuevamente nuestro agradecimiento por ser recibidos, así como el planteo de que se instrumenten mayores elementos y mecanismos de difusión, esclarecimiento y consulta en la sociedad en general, por ser un tema muy complejo, pero, a la vez, de largo plazo y de alto impacto en la vida de todos los habitantes del país.